

**DIP. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E**

ARACELI SAUCEDO REYES, Diputada integrante de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 8º fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto Se adiciona un párrafo a la fracción VIII, y se reforman las fracciones XX, XXI y XXII del artículo 9 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, para 2014 en el país el número de personas de 60 años y más fue de 11.7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la población total; cabe destacar, que en 2014 la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, en este sentido se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento.

En Michoacán, de acuerdo al INAPAM, habitan 439 mil adultos mayores que representan el 10 por ciento de la población total y que conforme a datos del Consejo Nacional de Población los ancianos tienen el índice de desarrollo social más bajo en el estado, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna, situación que nos obliga a legislar al respecto.

Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, ENIGH, 2012 menciona que del total de los ingresos corrientes de los hogares donde vive al menos un adulto mayor, 30 por ciento provienen de transferencias.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), el 45.9 por ciento de los adultos mayores que viven en Michoacán se encuentran en situación de pobreza y 200 mil no tienen acceso a una alimentación adecuada y a la salud, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Asimismo, cifras del INAPAM señalan que sólo el 3 por ciento de los adultos mayores en Michoacán tiene acceso a una pensión y el 53 por ciento tiene seguridad social ya sea del IMSS,

ISSSTE o del gobierno del estado. La mayoría de estos se encuentran en la zona urbana, mientras que en la zona rural, la mayoría de los adultos mayores viven en pobreza alimentaria y en abandono.

Esta situación de pobreza y dependencia va generando un rechazo al adulto mayor que termina por aislarlo y marginarlo de la vida y de la actividad familiar, lo cual les provoca cuadros depresivos y aislamiento e incluso el abandono.

De acuerdo a la CONAPRED con frecuencia los adultos mayores son falsamente asociados con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, lo que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia. “Esto los convierte en objeto de exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que son, y deben ser, gozados por todas las personas en un Estado democrático”, refiere el organismo.

Sin embargo, es preciso mencionar que en el Estado, el mayor porcentaje de personas mayores se encuentra entre los 60 y 70 años de edad, lo que hace necesario favorecer oportunidades laborales a las que pueda acceder este sector de la población y pueda contar con un ingreso económico en un ambiente de trabajo digno para ellos.

En este contexto de pobreza, marginación sin seguridad social y sin acceso pleno al derecho a la alimentación de los adultos mayores, resulta necesario se garantice una vejez plena, a través de garantizar sus derechos fundamentales como es a tener ingresos suficientes que cubran las necesidades de alimentación por medio de la inclusión económica.

Ahora bien, los derechos humanos son inherentes al ser humano y por ello toda persona tiene la posibilidad de gozarlos sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, edad, u otra condición y las garantías de estos derechos son establecidas por diversos instrumentos que protegen a los individuos contra actos que vulneran sus libertades fundamentales.

Hasta hoy en día, los derechos de los adultos mayores no han sido reconocidos específicamente en una convención o tratado concreto dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con otros grupos particulares, diversos instrumentos contienen numerosos derechos para los adultos mayores, se aplican y protegen a las personas de edad de la misma manera que se aplican al resto de las personas.

Respecto a la normativa internacional en primer lugar destaca la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en la cual se plasman ciertos derechos fundamentales extensivos a las personas mayores, entre ellos está el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por cualquier condición y el derecho a condiciones de vida adecuada. Un desarrollo más amplio se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9o. señala: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.⁶ Con ello se reconoce el derecho a la seguridad social.

Si bien es cierto que se hace referencia implícita a los derechos de los adultos mayores, la comunidad internacional comenzó a hacer énfasis en la situación de las personas de edad en el “Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento”, en el cual se insta a actuar en asuntos como la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de edad, la vivienda, el ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingreso y el empleo, la educación, la recopilación y análisis de datos derivados de investigaciones.

En 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, donde se enumeran 18 derechos de las personas de edad relacionados con la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad.

Finalmente, destacan la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, en ambos documentos los gobiernos se comprometieron a diseñar y ejecutar medidas para enfrentar los retos que plantea el envejecimiento; además, se propusieron más de un centenar de recomendaciones sobre tres temas prioritarios:

I) Personas de edad y el desarrollo;

II) Fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y

III) La creación de un entorno propicio y favorable para ellos.

A escala regional, la Convención Americana de Derechos Humanos incluye en el artículo 1o. la edad como “otra condición social” objeto de discriminación que debe ser erradicada. No obstante, también comprende algunas disposiciones particulares sobre el derecho a la vida y en el artículo 4o. establece específicamente la no imposición de la pena de muerte para los mayores de 70 años.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) señala medidas específicas dirigidas a las personas mayores; el artículo 9o. menciona: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa...” El artículo 17, sobre la protección a los ancianos, señala: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad...”

En todos los instrumentos normativos en que se establecen los derechos de las personas mayores, ya sea directamente o por extensión, se reconoce que no sólo se les debe proporcionar protección y cuidados, sino también se debe asegurar su participación en la sociedad.

Un avance significativo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual se publicó el 25 de junio de 2002 y en Michoacán la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo tienen por objeto garantizar el ejercicio

de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional y estatal, respectivamente, en la materia, de los principios, los objetivos, los programas, las responsabilidades y los instrumentos de la administración pública en los tres niveles, así como Institutos encargados de su aplicación.

Como puede observarse, nuestra legislación en la materia ya consagra los derechos de las personas adultas mayores que deben garantizarse y procurar el máximo de bienestar posible.

Sin embargo, todavía en nuestro país se sigue concibiendo a los adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad como simples objetos sociales los cuales deben ser atendidos mediante programas asistencialistas.

Esta concepción ha llevado a la formulación errónea de políticas gubernamentales de carácter paternalista que no visibilizan al adulto mayor como un verdadero sujeto social capaz de seguir contribuyendo a la familia, la comunidad y la sociedad en general.

Debemos reconocer y aceptar que las personas mayores siguen siendo sujetos sociales con derecho a participar en la actividad económica de nuestras comunidades y de decidir en forma independiente sobre los asuntos que nos conciernen.

La “Declaración de Principios de Naciones Unidas”: Independencia, Participación, Autorrealización, Dignidad y Cuidado, adoptada en forma unánime en 1991 por los Estados y el nuevo Plan Internacional de Acción sobre Envejecimiento a ser suscrito en ocasión de la II Asamblea Mundial, marcan un hito en este sentido: el reconocimiento de la contribución que hacen los adultos mayores en nuestras comunidades y familias de nuestro derecho inalienable a la participación en el planteamiento de políticas y a ser incluidos en procesos de decisiones.

Contrasta la realidad y las cifras que existen y que hemos referido sobre situación de los adultos mayores con el desarrollo positivo que han tenido últimamente los derechos de las personas mayores en el plano internacional, nacional y estatal. Por ello es necesario seguir avanzando en la dignidad e inclusión en todos los ámbitos de la entidad, incluidos los derechos económicos.

Por ello, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción VIII, y se reforman las fracciones XX, XXI y XXII del artículo 9 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

Artículo 9. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce y garantiza a las personas adultas mayores, así como los señalados en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

I...

II...

III...

...

VIII. Tener acceso a los servicios necesarios considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas ó materiales para su atención integral.

Tener acceso a acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas para lograr una alimentación adecuada a sus circunstancias y capacidades, así como a los satisfactores necesarios para ello, cuando carezca de medios propios recibir apoyos en materia alimenticia;

IX...

X...

...

...

...

XX. Decidir libremente sobre su actividad laboral, y a seguir siendo parte activa de la sociedad, recibiendo en consecuencia la oportunidad de ser ocupado en trabajos, actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su profesión, oficio o habilidad manual, aprovechando de esta manera sus habilidades, sin más restricción que sus limitaciones físicas o mentales declaradas por autoridad médica o legal competente;

XXI. Acceder a capacitación que le permita desarrollar una actividad o la prestación de un servicio acordes con su edad y capacidad, así como asesoría y seguimiento a iniciativas de gestión de crédito y micro crédito;

XXII. Ingresar a bolsas de trabajo de las instituciones públicas y privadas, así como gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o en otras opciones que les permitan un ingreso propio y un desempeño productivo.

Acceder a las oportunidades de empleo en áreas especiales en las que pueda desarrollarse dentro de las fuentes de trabajo, con horarios accesibles, de acuerdo con las prestaciones de ley y con salarios dignos.

Recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ámbito de sus competencias para fortalecer sus capacidades económicas;

...

...

...

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del año 2018.

ATENTAMENTE

DIP. ARACELI SAUCEDO REYES